

# **ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA VICTORIA DE LA UNIDAD POPULAR EN CHILE Y DE SU POSTERIOR CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS**

LUIS MAIRA

## INTRODUCCIÓN

LA EXPERIENCIA de la Unidad Popular chilena, con un gobierno que proclamaba la decisión de llegar a una sociedad socialista utilizando tanto para el acceso al poder como para la ejecución de un programa de cambios revolucionarios una vía política con la consiguiente búsqueda de mayorías electorales y la limitación de emplear sólo la legalidad vigente (íntegramente heredada de gobiernos burgueses), hicieron de Chile durante casi tres años “un gigantesco laboratorio social”, para emplear las expresiones del propio presidente Allende.

Ahora que la “vía chilena al socialismo”, al menos en su formulación original, ha entrado al campo de los fenómenos históricos, múltiples aspectos de ese intento quedan abiertos a la investigación y al análisis, siendo seguro que transcurrirá todavía algún tiempo antes de que se puedan extraer mediante éstas conclusiones que sean generalmente aceptadas. En relación a esa experiencia nos encontramos en una etapa de discusión y búsqueda en que es deseable que se formulen la mayor cantidad de recuentos históricos y de opiniones.

En ese entendido hemos intentado ordenar brevemente algunas notas relativas a la época que precede, condicionándolo, al gobierno de la Unidad Popular. Dos tópicos que nos han parecido de evidente interés han constituido la motivación esencial de estas páginas: ¿cuáles eran los rasgos de la coyuntura política que posibilitaron la victoria electoral de Allende?, y ¿cómo se había agudizado el predominio de los intereses norteamericanos y la dependencia chilena en las últimas décadas, hasta justificar la activa intervención posterior del gobierno de Richard Nixon, esencial para el derrocamiento del régimen constitucional chileno? En relación a los análisis que se formulan sobre uno y otro punto —debate en el que esperamos participar con contribuciones futuras— todo lo que aspiramos aquí es a entregar con cierto orden, un conjunto de antecedentes que sirvan en estos temas como marco.

## PRIMERA PARTE

1. *El cuadro político de Chile hacia 1970*

Es posible caracterizar la historia política de Chile, a contar del término de la segunda guerra mundial, por una exploración incesante de su burguesía de un modelo capitalista de desarrollo que funcione y asegure la viabilidad del sistema. Un somero recuento así lo prueba.

En 1947 el presidente Gabriel González Videla, radical, elegido sólo unos meses antes con el concurso decisivo del Partido Comunista rompe con éste, lo margina del gabinete y luego lo coloca fuera de la ley al lograr la aprobación de una "Ley de Defensa de la Democracia" (Ley No. 7897) que se convertirá en la herramienta eficaz para reprimir al movimiento sindical y a los sectores políticos de avanzada.

En 1952 triunfa en las elecciones presidenciales de ese año el general retirado Carlos Ibáñez del Campo, sin militancia política, apoyado por una heterogénea combinación de fuerzas que incluía al Partido Socialista Popular (una fracción del Partido Socialista entonces dividido), al Partido Agrario Laborista, en que predominaban antiguos integrantes del Partido Nacional Socialista chileno y al Partido Democrático del Pueblo. Aunque su imagen publicitaria lo presentó como un nacionalista de avanzada que se ubicaba en la línea de las grandes transformaciones políticas del continente en ese momento (Revolución boliviana, auge populista del peronismo en Argentina), llamado a optar desde el poder en forma de una alternativa definida, se inclina claramente por las soluciones encaminadas a preservar y consolidar la organización capitalista en Chile. A comienzos de 1955 Ibáñez aleja del gobierno a sus colaboradores socialistas y busca en su reemplazo la "asesoría" de la Misión norteamericana Klein Sacks, la que elabora un programa general de estabilización de precios, sueldos y salarios que sigue muy de cerca las conocidas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Este programa sólo puede ser aplicado parcialmente debido a las resistencias que encuentra en el movimiento obrero reunificado en 1953 en la Central Única de Trabajadores.

En las elecciones de 1958 los sectores de la burguesía consiguen una estrecha victoria para su abanderado, el empresario independiente Jorge Alessandri, que consigue aventajar por sólo 33 mil sufragios al candidato de la izquierda, Salvador Allende. Su gobierno de fuertes tonalidades conservadoras conoce dos etapas: una primera más ortodoxa en que se aplica una drástica política de estabilización de salarios y precios unida a la libre importación de toda clase de artículos manufacturados y de con-

sumo suntuario y una segunda de retorno al proteccionismo del productor nacional tras el agotamiento de las reservas internacionales que provocó la crisis de diciembre de 1961. Ambos momentos, sin embargo, se inspiran en el servicio de intereses antagónicos con los de la clase obrera y el campesinado, que en ese sexenio ven retroceder de un modo sensible su cuota de participación en la repartición del ingreso nacional. En todo instante su base principal de sustentación son las agrupaciones de empresarios a los que Alessandri había dirigido durante los largos años en que se desempeñó como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, máxima organización empresarial del país.

Fracasado el gobierno de Alessandri en su empeño de obtener una sucesión política directa, los sectores más tradicionales de la derecha chilena —representados por el Partido Liberal y Conservador— cierran filas en 1964 junto a la candidatura de Eduardo Frei, líder de la Democracia Cristiana que emerge como la única alternativa para impedir la victoria del doctor Allende. Frei levanta un programa de modernización de la sociedad chilena y utiliza buena parte de las consignas y reivindicaciones históricas de la izquierda. Ofrece realizar “una revolución en libertad”, que hábilmente presenta “exenta de los altos costos sociales que conlleva un programa marxista”. Habla de Reforma Agraria, Promoción Popular y Participación de los Trabajadores, con lo cual contribuye a que importantes masas católicas hasta entonces marginadas de toda actividad política, asuman una postura de apoyo a ese proceso de transformación. Con todo, la contradicción social que caracteriza al Partido Demócrata Cristiano, donde se albergan bajo el marcado predominio de los sectores medios todos los grupos sociales existentes en Chile (desde grandes empresarios a amplias capas campesinas y proletariado urbano), lleva a Frei a sacrificar los aspectos populistas y transformadores de su plan de gobierno y a entrar en conflicto simultáneo con las organizaciones de trabajadores que pretenden sin éxito obligarlo a una radicalización de sus planes y con los grupos reaccionarios que lo censuran por el desorden social creciente que se advierte en Chile y por no emplear mayor energía en la represión de las demandas de los trabajadores. Así, a medida que transcurre el periodo de su administración, Eduardo Frei se va quedando más y más solo y mientras aparecen desidencias importantes en su partido, las reivindicaciones de los trabajadores crecen hasta convertirse en una avalancha que sólo es posible contener intensificando la represión. El Presidente desoye las presiones de la propia Democracia Cristiana desde donde en 1967 se le propone la implantación de “una vía no capitalista de desarrollo” con un programa completo encaminado a hacer más radicales sus programas iniciales ya agotados, y prefiere apoyarse en nuevos acuer-

dos con los grandes consorcios norteamericanos productores de cobre, los que reciben nuevas franquicias en ese periodo; a la vez mediante nuevas inversiones extranjeras se impulsan los proyectos de expansión industrial. Así, el único gobierno que en América Latina sigue con fidelidad las instrucciones de la Alianza para el Progreso, como método de prevención de nuevas revoluciones socialistas en el continente, se convierte en la antesala del revés más importante experimentado por el Departamento de Estado después del triunfo de la Revolución cubana a comienzos de 1959.

El advenimiento de la Unidad Popular al gobierno en Chile se produce, de ese modo, solamente una vez que han fracasado todas las variables y modelos políticos ensayados por las fuerzas tradicionales como alternativa al proyecto socialista. Con González Videla (1946-1952) se agota el modelo represivo adscrito al esquema de la guerra fría; con Ibáñez (1952-1958) fracasa el modelo de la tendencia nacionalista populista; con Alessandri (1958-1964) se produce el colapso del modelo capitalista en su forma más conservadora y tradicional; con Frei y la DC (1946-1970) se prueba la no viabilidad del modelo reformista, modernizante y pronorteamericano.

## 2. *¿Por qué en 1970?*

Con todo, si el desarrollo interno de las experiencias intentadas por la derecha y los sostenedores del capitalismo en Chile, así como sus malos resultados, contribuyen a erigir a la Unidad Popular en la única alternativa no ensayada ni fracasada hacia los inicios de la campaña presidencial de 1970, esto por sí solo no alcanza a explicar el triunfo electoral de la izquierda.

Para saber por qué fue posible la aplicación de la vía chilena al socialismo en ese año hay que hacer acopio de otras causas que nos ayudarán más tarde a comprender la oposición y el tipo de resistencia tanto interna como internacionales a que debía hacer frente el gobierno de la Unidad Popular.

a) *El esquema tripolar de fuerzas.* A medida que la izquierda —en proceso de creciente expansión a partir de la creación del Frente de Acción Popular en 1956— aumentaba sus fuerzas (ver cuadro) se registró en la sociedad chilena una sostenida tendencia a la polarización política.

La fracasada experiencia del Frente Popular que eligiera a los presidentes Pedro Aguirre Cerda en 1938 y Juan Antonio Ríos en 1942 había determinado un proceso de descrédito y dispersión de los partidos de iz-

## CUADRO DE CRECIMIENTO ELECTORAL DE LA IZQUIERDA

<i>Año</i>	<i>Elecciones Generales</i>	<i>Porcentaje Fuerzas de Izquierda</i>	<i>Composición de la Izquierda</i>
1958	Presidenciales	28.9%	PS (unificado en 1956) PC; PD
1961	Parlamentarias	30.6%	PS; PC; Partido Democrático Nacional y Vanguardia Nacional del Pueblo
1964	Presidenciales	38.6%	<i>Id.</i>
1965	Parlamentarias	27.0%	<i>Id.</i>
1969	Parlamentarias	38.9%	PS; PC; Partido Radical*

\* Se incluye el 50% de la votación total del Partido Radical que se dividió en 1969 al expulsar la dirección de izquierda al poderoso sector derechista de esa colectividad.

quierda. Éstos alcanzan su punto más bajo en la primera candidatura presidencial del doctor Salvador Allende en 1952, cuando éste, con el apoyo del Partido Socialista de Chile y del Partido Comunista desde la clandestinidad, obtuviera 52 mil sufragios, con un 5.5% del total de votos válidos emitidos. A partir de allí se inicia la recuperación como puede advertirse en el cuadro transcrito. Paralelamente los partidos de derecha van trazando una política de alianzas encaminadas a impedir el eventual triunfo de una combinación dominada por partidos marxistas. Así, mientras en las elecciones de 1958 los partidos tradicionales enfrentan a Salvador Allende divididos en cuatro candidaturas (Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Pedro Enrique Alfonso y Antonio Zamorano), en 1964 se agrupan en torno a Eduardo Frei, al tiempo que mantienen como una mera fachada la postulación del radical de derecha Julio Durán, en la convicción de que un retiro de la candidatura del partido radical podría redundar en ventaja electoral para el doctor Allende. Del papel desempeñado en todas estas decisiones por el gobierno de Estados Unidos ya no caben dudas de ninguna índole luego de las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia, William Colby, quien con detalle explicó el apoyo que su organización viene prestando desde 1964 “a las fuerzas democráticas de Chile”.

Sin embargo, instalada la DC en el poder, las posibilidades de configurar “alianzas antimarxistas” se agotan. Por su ubicación en el espectro político chileno el PDC debe enfrentar dos oposiciones, una de izquierda

y otra de derecha; debido a la violencia que alcanza el ataque de la derecha al gobierno de Frei no se reproduce en 1970 el acuerdo de 1964. Los grupos más reaccionarios se sienten obligados a levantar una candidatura propia y esta decisión no los asusta puesto que confían en el arrastre electoral de su abanderado Jorge Alessandri.

Por primera vez Salvador Allende puede sostener una campaña en que no todas las fuerzas se dirigen en contra suya. Además, el efecto de las campañas de amedrentamiento del electorado frente al "pelibro comunista" han perdido impacto por el abuso de su empleo. Para todos resulta más evidente el estancamiento del crecimiento bajo patrones capitalistas que las amenazas de "una dictadura del proletariado".

La victoria de la Unidad Popular se produce gracias a la división de las fuerzas del electorado que apoyan a los partidos de la burguesía grande y pequeña. Allende consigue el 4 de septiembre de 1970 el 36.3% de la votación, resultado inferior tanto al que él mismo había obtenido en las anteriores elecciones presidenciales (38.6%) como al logrado por los partidos de izquierda en marzo de 1969 en las elecciones parlamentarias (38.9%).<sup>1</sup>

b) *El ensanchamiento de la base ideológica de la izquierda chilena.* Con todo, aunque inferior en porcentajes a los obtenidos por la izquierda en los eventos anteriores, la votación de septiembre de 1970 se fundaba en un respaldo cualitativo más amplio que el histórico, lo que afianzaba una base de crecimiento futuro no bien se despejaban ciertas dudas que el advenimiento de un Gobierno Popular suscitaban a capas

<sup>1</sup> Es importante detenerse a considerar la fragilidad del esquema tripolar de fuerzas a partir del momento en que la Unidad Popular accede al gobierno. La ubicación sin solución de continuidad de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional (de extremo derecha) en el abanico político chileno —todos situados a la derecha de Allende— así como la comunidad de intereses antisocialistas lleva a éstos a superar rápidamente "la querrela de familia" de 1970 y a presentar un Frente único, cada vez más beligerante a los proyectos de la Unidad Popular. Así, tras acuerdos electorales y coyunturales los dos grandes Partidos tradicionales suspenderán toda pugna interburguesa para aliarse en julio de 1972 en una Confederación de Partidos —bautizada como Conferación Democrática (CODE)— y presentar listas comunes de candidatos en la elección general de parlamentarios de 1973. De la Unidad Popular habría que decir que fue incapaz de diseñar y aplicar una estrategia fundada en los "intereses de clase" de amplios sectores populares de votantes de la Democracia Cristiana para atraerlos hacia el apoyo a sus planes y se enredó, en cambio, en polémicas o en ocasiones en la búsqueda de acuerdos con la dirección superior del Partido Demócrata Cristiano, donde no podía predominar otra posición que la de hostilidad a todo avance que pudiera llevar al socialismo.

de la población cuyos intereses eran objetivamente coincidentes con los del proyecto histórico de la Unidad Popular.

En sus esfuerzos de 1958 y 1964, Salvador Allende había tenido como base esencial de apoyo a los partidos Socialista y Comunista y como única vertiente ideológica el marxismo-leninismo. En los últimos años —y sobre todo a partir de la descomposición del gobierno de Frei en 1967— la crisis del modelo capitalista dependiente ensayado en Chile, había traído al campo de la izquierda a sectores cristianos que hacían suyo el proyecto socialista —a veces con posturas sumamente radicales— y a los grupos más avanzados de la Social Democracia que intentaban recomponer aceptando su pérdida de hegemonía un esquema de fuerzas semejante al del Frente Popular.<sup>2</sup>

Allende, previendo con gran intuición el significado potencial de esta ampliación de su base de apoyo, incorporó a sus planteamientos esenciales el del “pluralismo ideológico” e insistió siempre en que la Revolución chilena sería posible gracias al aporte conjugado de todos los revolucionarios “marxistas, cristianos y laicos de avanzada”. En verdad este factor jugó, pese a todo, un rol significativo. La Iglesia Católica al ver a cristianos en actividad junto al gobierno se mantuvo en una posición de neutralidad y no atacó en ningún momento a la Unidad Popular, a diferencia de lo ocurrido en 1964. Universidades privadas, instituciones como la masonería y otras de carácter social o cultural fueron del mismo modo neutralizadas al mismo tiempo que de sus filas se iban reclutando nuevos apoyos para el Gobierno Popular. Por primera vez en la historia de los cambios sociales en el continente se asistió a una colaboración, leal y significativa de personas que sin compartir en su integridad la ideología del proletariado eran capaces de integrar sus visiones del hombre y del mundo, para traducir todo eso en la realización de un programa común.

c) *La significación de Salvador Allende como líder nacional.* Chile, hasta 1973, fue un país donde el poder estuvo singularmente repartido entre las organizaciones políticas y los líderes. La base de legitimidad de todas las decisiones importantes radicaba siempre en una instancia orgánica, pero éstas normalmente se gestaban y se imponían en mérito del peso y la influencia de las figuras políticas principales.

La explicación de este fenómeno no está suficientemente clara ni ha

<sup>2</sup> Del propio PDC salieron dos de los Partidos de la Unidad Popular: el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) creado en 1969 y la Izquierda Cristiana (IC) organizada en julio de 1971, luego que un grupo importante de dirigentes y militantes del PDC rompieran con el Partido a raíz del apoyo recibido de la derecha por el candidato democristiano en las elecciones extraordinarias de un diputado por Valparaíso.

merecido hasta ahora un análisis serio de los historiadores políticos. Sin embargo, un intento de justificación puede extraerse de las "singularidades" del propio desarrollo político chileno.

Es probable que Chile, precisamente por haber podido evitar —luego de la organización institucional de 1833 efectuada bajo la égida de Diego Portales— la influencia de los caudillos militares y sus secuelas de inestabilidad política, características de la mayoría de los países latinoamericanos en el siglo XIX y en la primera mitad del actual, haya desarrollado como elemento de compensación un tipo muy "sui generis" de "caudillo civil". El carácter fuertemente presidencial del régimen político consagrado en la Constitución de 1833 sobrevaluó, con muy pocos momentos de excepción, a las figuras carismáticas, con ascendiente directo y prestigio sobre la opinión pública y los grupos de presión, de tal modo que las palancas de poder político de la sociedad chilena estuvieran en manos de las grandes figuras con prescindencia de su efectiva militancia política<sup>3</sup> o de su situación de poder interno en los partidos políticos a que pertenecían, no siendo extraño el ejemplo de líderes que privados de influencia "interior" en los órganos partidarios de cúpulas ejercieron muy importante influencia en el país. Por lo demás —y los casos de Eduardo Frei y el PDC y el doctor Salvador Allende en el PS lo demuestran— el crecimiento de las fuerzas políticas nuevas hasta obtener su sólida edificación como partidos políticos con influencia de masas, coincidió con el ascenso y la consagración de sus dirigentes más destacados.

Así un balance de la historia de los últimos 40 años en Chile nos hace tropezar una y otra vez con los mismos nombres: Arturo Alessandri y más tarde su hijo Jorge en el campo de la derecha; Carlos Ibáñez y Eduardo Frei en el del centro y la expresión de las capas medias y Salvador Allende en el movimiento popular.

Como paradoja de la izquierda chilena —una más— ésta, a pesar del ascenso y diversificación y conciencia alcanzadas por las fuerzas sociales en su país fue tributaria en este aspecto de otra de las características de su sistema político. Salvador Allende reunió todos los rasgos del "líder político" en un nivel de preparación y capacidad nada comunes. Fue fundador del Partido Socialista, pero no logró ser su dirigente máximo. Es más, en el PS normalmente sus posiciones fueron minoritarias hasta el extremo de que su Partido, heterogéneo desde sus orígenes (como que fue el resultado de la unión de cinco pequeñas organizaciones políticas),

<sup>3</sup> Así durante la vigencia de la Carta de 1925, un país tan fuertemente politizado como Chile tuvo a tres presidentes de la República independientes: a Carlos Ibáñez en dos oportunidades (1927-1931) y (1952-1958) y a Jorge Alessandri (1958-1964).

en 1933, acordó en su Congreso Nacional de Chillán en 1968 rechazar la vía electoral que antes de dos años conduciría a su principal personero a la presidencia de la República.

Debido a que, de acuerdo a las reglas vigentes en Chile, la formación de una "figura nacional" tomaba tiempo, la gravitación de Salvador Allende en el panorama político de su país fue creciente. Ministro de Salud a los 31 años, senador en representación de distintas zonas del país desde 1945, Presidente del Senado durante el gobierno de Frei, llegó un momento en que, en medio de la crisis, era la única personalidad de gran trayectoria que no había recibido la oportunidad de gobernar. Al interior de la izquierda, donde por cierto, no faltan las personas inteligentes ni preparadas, la desproporción en términos de significación nacional entre Allende y los demás dirigentes es tal que su propio Partido, en cuyo Comité Central no tenía Allende mayoría, resolvió a fines de 1969 levantarlo una vez más como su abanderado. Curiosamente, a esas alturas sus tres candidaturas anteriores, sin éxito, no eran un elemento desfavorable sino todo lo contrario.

Es fundamental considerar este punto. A pesar de que, desde la perspectiva del pensamiento revolucionario, lo deseable es que sean las masas organizadas, actuando por conducto del o los partidos que constituyen su vanguardia, las que adopten todas las decisiones políticas, es enteramente seguro que en Chile la izquierda no habría tenido expectativas de victoria —dentro del sistema político democrático burgués y de sus reglas— de no mediar la significación alcanzada por su líder, el doctor Salvador Allende.<sup>4</sup>

d) *El nuevo cuadro internacional.* El desarrollo político de América Latina no se puede representar gráficamente como una línea recta. Está más bien hecho de altos y bajos, de avances y retrocesos. En sus flujos y reflujos sólo quedan en pie las experiencias de transformación más sólidas, las que son capaces de resistir las presiones internas y externas que se dirigen tanto para ponerles término o, si es posible, desnaturalizarlas desde dentro.

Por eso el inicio de una experiencia que proclame la necesidad de "cambios revolucionarios" no es imaginable en un contexto internacional

<sup>4</sup> Por lo mismo, la actuación de Salvador Allende en el gobierno y su heroica conducta final cobran mayor significación dado que constituyen el mejor testimonio de la profundidad de su compromiso. Si bien por razones tácticas Salvador Allende desarrolló buena parte de su vida en medios muy diferentes a aquellos en que actúan los revolucionarios, en la hora decisiva demostró que era capaz de realizar cabalmente la parte más difícil: morir como revolucionario en defensa de sus ideas.

desfavorable. En tal sentido la Unidad Popular encontró en 1970 un buen momento para acceder al poder, luego de una victoria electoral.

La situación de fines de la década de los 60 era en la región latinoamericana enteramente distinta de la que caracterizó el decenio anterior. En los 50 los diversos países se uniformaron en torno a las exigencias de la guerra fría. Junto a los gobiernos de carácter militar y posturas "maccartistas", coexisten gobiernos civiles dóciles a los intereses de Estados Unidos que golpeaban fuertemente la organización sindical y política de izquierda, proscibían a los partidos comunistas y contraían compromisos militares que asociaban su suerte a la del vecino del Norte en el caso de nueva conflagración mundial, a la vez que suscribían acuerdos de aprovisionamiento de materias primas y recursos estratégicos. El sólido respaldo a la recién creada organización de Estados Americanos, la vigencia del tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro y la aprobación de los acuerdos finales de la Conferencia de Caracas de 1954 que proscibían el comunismo en el Continente son algunos de los hitos indicativos de ese clima.

Quince años después todo había cambiado. La Revolución cubana, definitivamente afianzada tras el fracaso de la invasión de Bahía Cochinos en abril de 1961, cambió el panorama político latinoamericano y probó la viabilidad del socialismo en nuestros países. La progresiva distensión internacional entre Estados Unidos y los grandes países comunistas, Unión Soviética y la República Popular China, era un elemento que ahora impedía la vigencia de una política oficialmente anticomunista de corte clásico. Pero al mismo tiempo el desgaste del gobierno de Estados Unidos involucrado en un costoso y fracasado conflicto en el Sudeste Asiático le impedían multiplicar otros focos susceptibles de acarrearle la condena internacional, lo que quedó demostrado por las propias declaraciones del director de la CIA, William Colby, quien ha expresado que su agencia consideró incluso la posibilidad de un desembarco de tropas para impedir la investidura de Salvador Allende como Presidente Constitucional de Chile, pero que tal hipótesis fue descartada por no existir las condiciones políticas apropiadas.

Especialmente favorable era la situación del Cono Sur de América Latina. En Perú habían llegado al poder en octubre de 1968 militares de sólidas convicciones nacionalistas que, como primera medida, habían nacionalizado las instalaciones del consorcio norteamericano "International Petroleum Company", filial de la poderosa Standard Oil de Nueva Jersey y luego de no indemnizarla habían resistido a pie firme las amenazas de aplicación de la enmienda Hickenlooper que implicaba la suspensión de la ayuda norteamericana, amenaza que finalmente el Departamento de

Estado no se atrevió a materializar. En Uruguay, la administración de M. Pacheco Areco enfrentaba las secuelas de la prolongada crisis política y financiera del país, lo que posibilitaba el Frente Amplio, primer agrupamiento significativo de la izquierda (en el que se incluía al PDC) con lo que se rompía la prolongada disputa del poder reducida a los dos partidos tradicionales: el Nacional y el Colorado. En Argentina, aun cuando se mantenía un gobierno militar encabezado por el general Alejandro Lanusse ya se hacían patentes los síntomas del ocaso de ese régimen que condujo en 1972 a la “normalización política” y al llamado a elecciones. En Bolivia, por su parte, se había instaurado otro gobierno militar de carácter nacionalista, el del general Juan José Torres, que buscaba la colaboración del movimiento sindical y estudiantil y colocaba en la orden del día de la discusión un programa de reformas avanzadas.

En síntesis, tanto los factores positivos de la situación mundial —aceptación de la República Popular China, en la comunidad internacional, distensión entre Estados Unidos y la URSS, fracaso evidente del bloqueo contra Cuba— como los negativos —guerra de Viet Nam— y especialmente la situación política de los países vecinos de Chile, configuraban un cuadro favorable al reconocimiento de una victoria electoral de las fuerzas de izquierda. De esa situación tuvo perfecta conciencia Salvador Allende, quien usó este argumento para desbaratar las campañas de amedrentamiento dirigidas a la opinión pública para el evento de su triunfo en las urnas.

## SEGUNDA PARTE

### 1. *Presencia norteamericana en la economía chilena*

La intromisión norteamericana en los asuntos internos de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular no tiene nada de caprichosa ni de casual si nos atenemos a la lógica de la intervención imperialista. Su justificación profunda debemos encontrarla en dos factores bastante obvios: *a)* la defensa de poderosos intereses norteamericanos especialmente mineros, nacionalizados por Allende, y *b)* la peligrosidad de la propagación del modelo político chileno para el caso de que tuviera éxito en su realización.

Pero a su vez, para comprender mejor todo esto es conveniente realizar un brevísimo balance del desarrollo de la economía chilena y de sus manifestaciones de dependencia en las últimas décadas.

Hasta la crisis mundial de 1929 Chile presenta todas las características

comunes al modelo de economía exportadora que se inserta sin dificultades en el proceso de "división internacional del trabajo". Luego de haber dispuesto en el siglo XIX de una sólida actividad agrícola que le permitió colocar sus granos en mercados tan distantes como Australia, Polinesia y California en la época de la fiebre del oro, al término de la Guerra del Pacífico (1884) había pasado a apoyarse en la producción minera de las provincias conquistadas en el Norte, rico en grandes yacimientos de cobre y salitre; este último producto pasa a constituir hasta la década de los 20 el recurso de sustentación básico de una economía que ha de tomar desde entonces una fisonomía monoprodutora de la que no se ha desprendido.

Curiosamente —y éste sí es un punto que ha merecido suficiente consideración— la vitalidad y el empuje de la burguesía chilena se agotan precisamente en el momento de su mayor victoria militar. Luego de las jornadas de la independencia, la burguesía chilena había exhibido todos los rasgos económicos, sociológicos y políticos que caracterizan a las generaciones de "pioneros" de los países capitalistas avanzados: capacidad para poner en práctica un sistema político estable, correcta política inmigratoria y de colonización; una marina mercante nacional, con capacidad para trasladar la totalidad de la producción exportada; sentido de la innovación tecnológica y el modernismo. Así en Chile, junto a un florecimiento de la actividad agropecuaria a partir de la década del 30, se produce años más tarde el auge de los yacimientos de plata y una consolidación de la actividad cuprífera, que lo lleva en 1860 a ser el primer productor de cobre de la época, con un volumen anual de producción ligeramente superior a las 60 mil toneladas. En todo este proceso dinámico destacan personalidades que formando parte de la clase gobernante tienen un sentido innovador y progresista como José Tomás Urméneta, ligado a la actividad minera del Norte Chico; Matías Cousiño, iniciador de las minas de carbón de la provincia de Concepción; José Santos Ossa, pionero de la actividad salitrera; los ricos mineros Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo, quienes llevados por su espíritu innovador se retiraron del partido liberal y fundan en 1866 el partido radical que adhieren a los preceptos del evolucionismo "darwiniano" y la sociología de Comte.

Sin embargo, esta generación de pioneros no deja sucesión idónea y la burguesía chilena, a contar de las últimas décadas del siglo XIX, carente del empuje para llevar a Chile hacia el campo de países capitalistas de alto desarrollo, como parecía ser su destino natural, en ese instante inician un proceso de extranjerización de la economía, al tiempo que llevan al país a una crisis política cada vez más aguda. Apenas terminado el

conflicto entre Perú y Bolivia los certificados de dominio de los yacimientos salitreros son transferidos a consorcios británicos, entre los cuales alcanza una posición principal el financista de Tomás North, quien gustaba denominarse a sí mismo “el Rey del Nitrato”. Un intento nacionalista del presidente José Manuel Balmaceda que llegara al poder en 1886 con un programa que contemplaba la creación de un Banco Nacional y un Fondo de Rescate de la riqueza salitrera desemboca en la guerra civil de 1891 en que el sector constitucionalista es derrotado, el presidente Balmaceda arrastrado al suicidio y sus iniciativas enteramente desbaratadas con el inicio de una “República Parlamentaria” que hasta 1925 mantendría al país en la inestabilidad y el desgobierno. Esta etapa sería particularmente favorable a la penetración del capital extranjero: en 1906 el capitalista norteamericano William Braden adquiere la propiedad minera de El Teniente —la segunda mayor mina del país con una producción actual superior a las 200 mil toneladas por año— la que tres años más tarde transfiere a los Guggenheim (ligados también al dominio de la Anglo Lautaro propietaria de los mayores depósitos de nitrato, María Elena y Pedro de Valdivia); éstos a su vez transfieren El Teniente a la Kennecott Copper Corporation que inició su explotación. En 1910 el inversionista de Boston Albert Burrage logra del gobierno chileno la concesión de Chuquicamata —actualmente con una producción de 350 mil toneladas por año, considerada la mina de cobre de tajo abierto más grande del mundo. Igual que en el caso anterior, los Guggenheim de Nueva York obtienen el traspaso de los títulos organizando la Chile Explotation Company, cuyo 51% fue adquirido por Anaconda en 1923 en la suma de 77 millones de dólares en lo que el historiador económico Marc Herold describe como “la transacción financiera más grande de la primera historia de la minería en gran escala”. La propia Anaconda había organizado en 1916 la Andes Copper Mining Company, para explotar el mineral de Potrerillos que concluye por agotar en 1958, abriendo entonces al lado una nueva mina, el Salvador, que hasta hoy es el tercer gran mineral nacional, conformando con los dos anteriores lo que la legislación chilena denomina “la Gran Minería del Cobre”.

De este modo, cuando llega la crisis del salitre a romper el monopolio natural de Chile, luego que durante la primera guerra mundial científicos alemanes descubrieran el nitrato sintético, los intereses norteamericanos están ya firmemente asentados en la que pasa a constituirse en la principal riqueza nacional. En este momento se inicia también el predominio creciente en los intereses norteamericanos en la economía chilena. Serían sólo las secuelas del desajuste mundial de los años 29 al 31,

que en Chile repercutieron drásticamente al dejar apiladas en canchas una producción de cerca de 2 millones de toneladas de salitre, provocando una cesantía masiva que sólo encuentra parangón en la que actualmente ha provocado la Junta Militar y ponen al desnudo las fisuras de una economía sin sector industrial propio, que originarán un cuestionamiento del modelo económico y el proyecto político aplicado hasta entonces.

El proceso de desnacionalización económica había traído al país las condiciones propias de la explotación capitalista, determinando la aparición de un proletariado en las zonas mineras del Norte Grande. Allí surge, ya a comienzos del siglo, un vigoroso movimiento obrero que desde sus orígenes tiene una clara perspectiva del carácter político de su lucha y que bajo la conducción de Luis Emilio Recabarren, un obrero tipógrafo al cual se considera con razón "el padre de la clase obrera chilena", organizó en 1912 el Partido Obrero Socialista que proclama en su declaración de principios la necesidad de poner fin a la explotación del hombre por el hombre y llegar al establecimiento de una sociedad de trabajadores en un reemplazo de la sociedad capitalista. En los años siguientes se fundaron los dos grandes partidos populares: el Partido Comunista en 1922 y el Partido Socialista en 1933. Simultáneamente, al calor de la crisis que vive el país, el Partido Radical, que en 1906 bajo la inspiración de su principal ideólogo Valentín Letelier había proclamado su adhesión al "socialismo evolucionista", comienza a preparar las condiciones para una alianza política entre las capas medias por él representadas y las organizaciones populares. En 1936 se organizó el Frente Popular que inscribe en su programa las metas de la industrialización nacional; en las elecciones presidenciales de 1938 el candidato del Frente, Pedro Aguirre Cerda, obtiene una estrecha victoria.

A pesar de que el Frente Popular estuvo estructurado sobre la base de la clara hegemonía del Partido Radical, en aquel entonces una de las más poderosas organizaciones políticas, es de todos modos interesante observar las limitaciones de su plataforma programática en relación a las tareas de la independencia nacional. Por considerar que no existían condiciones favorables se rechazó considerar la posibilidad de realizar siquiera una Reforma Agraria. Idéntica actitud se tuvo frente a la eventual recuperación de riquezas básicas en manos extranjeras. Claude Heller a este respecto ha señalado: "Los objetivos y las limitaciones del Frente Popular fueron inmediatamente enunciadas por Aguirre Cerda, quien en un mensaje a la nación señaló que Chile no estaba listo para nacionalizar o socializar sus grandes industrias del cobre y del nitrato, pues carecía del capital necesario para ello: «...mi gobierno será nacionalista en el sentido de que defenderá los intereses chilenos, pero su nacionalismo será

tanto la cabeza como su corazón... No intentamos mexicanizar a Chile. Los dos países son muy diferentes. Podemos aprovechar los aciertos de México, pero también sus errores».<sup>5</sup>

Esta primera experiencia de la izquierda chilena en el gobierno de Chile, definida a sí misma como nacionalista, pero no nacionalizadora, evitó de este modo cualquier fricción con los intereses estadounidenses por el muy sencillo expediente de no enfrentarlos. En cambio se abocó a la obtención de dos objetivos principales: la expansión y democratización del sistema nacional de educación y un plan de industrialización interna.

Para conseguir lo segundo el presidente Aguirre Cerda obtuvo la aprobación por estrecho margen de la ley que creaba la Corporación de Fomento de la Producción, ente autónomo al que se encargó la preparación de un Plan Nacional de Desarrollo, el diseño de los proyectos de industrialización básicos que debía impulsar mediante la creación de empresas públicas y el apoyo a los proyectos de creación de establecimientos industriales provenientes del sector privado. Se definió así una estrategia que radicó en el Estado chileno las iniciativas de mayor envergadura; la creación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) para establecer una amplia red de plantas hidroeléctricas; la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) para explotar el petróleo de la zona magallánica al extremo sur; la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) para absorber la actividad siderúrgica (ésta sería más tarde privatizada, condición en que permaneció hasta que el Gobierno de la Unidad Popular la retransfirió al control público) y algunos otros de menor entidad. En cambio los proyectos fáciles de creación de plantas industriales —pequeños, medianos o grandes— destinados a sustituir importaciones con producción interna fueran entregados al esfuerzo de la burguesía nacional.

En este nuevo empeño el comportamiento de los empresarios chilenos probó definitivamente el agotamiento de su vitalidad como clase. Presionaron y obtuvieron de los distintos gobiernos una política arancelaria que cerraba el paso a toda producción extranjera y los entregaba al mercado interno sin exigencia alguna de calidad o nivel de precios. Reclaman del Estado un tratamiento preferencial en la determinación de las políticas cambiarias y de importación. Rechazan sistemáticamente cualquier legislación que sancionara el delito económico y ordenara una política de inversiones nacionales que les permitió capitalizar el esfuerzo público en beneficio propio. Baste al respecto con señalar que en 1968 de cada 100

<sup>5</sup> Claude Heller, *Política de unidad en la izquierda chilena (1956-1970)*, México. El Colegio de México, Jornadas 73, 1973, p. 58.

escudos que componían la inversión de origen nacional en Chile, 75 provenían del Estado, en tanto que sólo 25 venían de la iniciativa privada. Sin embargo, utilizando diversos mecanismos de transferencia, de esos 75 sólo 49 quedaban en definitiva como capitalización pública, pasando los 26 restantes a manos de particulares.

La burguesía chilena, consciente de sus propias limitaciones para organizar la actividad productiva, descubrió antes que otros las perspectivas de aprovechamiento que ofrecían el Estado y las autoridades públicas. Practicó un curioso tipo de neocapitalismo sin eficiencia que en todo caso fue rigurosamente fiel a la idea de "socializar los perjuicios y privatizar los beneficios" como consigna para la conducta práctica de los empresarios. En el vasto aparato estatal chileno se entronizaron las organizaciones empresariales al establecer la legislación una importante representación "gremial" en la composición de los Consejos Directivos de las empresas del Estado, los organismos descentralizados y de administración autónoma. En esta tarea de impulsar una expansión industrial que, en términos económicos menos favorables, eran absolutamente incapaces de sustentar se fueron plasmando las principales relaciones de dependencia de la burguesía nacional chilena y los grandes centros del capitalismo mundial, de preferencia Estados Unidos. La creación de los organismos internacionales de crédito los habituó a buscar en ellos los recursos financieros para cualquier plan; la falta de imaginación para la creación tecnológica los llevó a establecer hasta en los rubros menos sofisticados acuerdos con las grandes firmas para el arriendo de patentes y marcas, lo que acarreó como consecuencia un pago de crecientes cantidades por concepto de *royalties* y otras regalías.

La clase dirigente chilena, cuyo rasgo distintivo fue suplir, a todo lo largo del siglo XIX, su escasa eficiencia económica con una gran habilidad política en el manejo de los mecanismos de poder, perdió en la práctica todo arresto nacionalista y aceptó acomodarse en el esquema de actividades de los grandes consorcios imperialistas.

Una muy buena prueba de esta orientación nos la proporciona la actividad del parlamento chileno en el que los sectores representativos de la burguesía, en toda su gama, tuvieron en el control mayoritario prácticamente sin solución de continuidad. Las inversiones norteamericanas radicadas hasta la década del 60 fundamentalmente en el cobre, el hierro, el salitre y los servicios públicos, jamás se ciñeron para los efectos tributarios o cambiarios, al estatuto común. Sus reglas fueron acordadas mediante una legislación especial que les confió invariablemente grandes "incentivos". Sin embargo no contentos con esto, los representantes de mayoría idearon una doctrina jurídica denominada de los "contratos-leyes"

conforme a la cual las franquicias otorgadas a una empresa extranjera por medio de una norma legal o a través de un decreto de inversión no podían ser modificadas por otra ley posterior, puesto que el acuerdo elevado a la categoría de ley se incorporaba al patrimonio del inversionista extranjero y pasado a representar para él “un derecho adquirido” no susceptible de ser afectado ni siquiera por un acto posterior de ejercicio de la soberanía nacional. Tal beneficio fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia en favor de la ITT con relación al llamado “Convenio Telefónico” que en 1929 extendió una concesión de 99 años al poderoso complejo americano de las comunicaciones con el derecho de reajustar el valor de sus tarifas de acuerdo a una “Cláusula de Oro” lesiva al interés del Estado chileno y de los usuarios. Las diversas enmiendas a la legislación del cobre y sobre todo los acuerdos suscritos por el gobierno del presidente Frei con las Compañías en 1964 (conocidos como “Convenios del Cobre”) dieron también lugar a esta pretensión de inmutabilidad absoluta de los privilegios alegados por ellos en un determinado instante.

## 2. *La agudización de la dependencia*

El esquema tradicional descrito sólo podía funcionar mientras subsistieran sus supuestos esenciales, el más importante de los cuales era la posibilidad de un crecimiento industrial vía sustitución de importaciones. Sobre la base del esfuerzo —más aparente que real como hemos visto— de los inversionistas chilenos.

A fines de la década de los 50 tal posibilidad se tornó crítica. La política aplicada por la misión de asesores norteamericanos Klein-Sacks, con sede en Washington, provocó una recesión en la economía chilena sin que sea del caso verificar si la causa fue el desconocimiento de la realidad chilena que tenían los formuladores del plan o la ejecución sólo parcial de sus recomendaciones por parte del gobierno del general Ibáñez. Lo concreto es que a más de las dificultades de incremento de la inflación, de devaluación del peso, y del descenso coyuntural de la producción industrial en esa época se llegó al límite del crecimiento basado en la fabricación nacional de los bienes de consumo inmediato y durable que anteriormente se importaban. Durante el gobierno del conservador empresario Jorge Alessandri la crisis se agudizó sin que se resolviera un nuevo programa por más que el gobierno de la época, a fin de conseguir parte de los recursos ofrecidos por el Programa de la Alianza para el Progreso, anunciara solemnemente su decisión de aplicar un Plan Decenal de Desarrollo elaborado por técnicos de la Corporación de Fomento.

La verdadera respuesta para una nueva etapa sería proporcionada en 1964 por el líder democristiano Eduardo Frei al iniciar su mandato presidencial. La propia situación de deterioro en que se encontraba el país, así como el desafío que representaba para el "establecimiento" el advenimiento de un gobierno de tendencias socialistas, obligan a un debate profundo durante la campaña en que ninguna definición importante puede ser soslayada. En la formulación del "Programa de la Revolución en Libertad" intervinieron decenas de personas, pero tres de ellas contribuyeron a precisar sus características esenciales, sin lograr una armonía de conjunto, lo que obligó más tarde al propio Frei a una constante tarea de arbitraje; éstos fueron los economistas Jorge Ahumada y Raúl Saez y el sociólogo Roger Veckmann. Ninguno de los tres curiosamente era militante de la Democracia Cristiana.

Ahumada, antiguo financiero internacional y profesor universitario, fue el jefe del programa de Frei. Observador talentoso de la realidad chilena a pesar de sus largos años de ausencia del suelo patrio, basaba sus enfoques en lo que él mismo denominaba "la crisis integral de Chile"; era de todos el que más creía en la necesidad de instrumentar un nuevo orden social concitando la presencia de las fuerzas sociales más activas de Chile, no sólo el proletariado industrial. A él correspondió el diseño general de la estrategia de desarrollo y la orientación de la campaña que puso énfasis en la idea de que en Chile "todo tiene que cambiar" y que los cambios deben realizarse con "participación del pueblo". Su influencia en la orientación en el gobierno de Frei fue mínima, pues se negó a asumir responsabilidades directas y retornó a asumir tareas en Venezuela donde falleció al cumplirse el primer año del ascenso de Frei.

Raúl Saez fue el encargado de los problemas del desarrollo industrial y el tratamiento a la inversión extranjera, y su influencia fue decisiva hasta bastante avanzado el gobierno democristiano. Ingeniero civil, antiguo ejecutivo de empresas públicas, había saltado a la notoriedad al ser llamado a integrar el Comité Asesor de la Alianza para el Progreso (conocido comúnmente como el Comité de los Nueve Sabios). Este trabajo en realidad coincidía con sus convicciones más hondas. Fervoroso partidario de las inversiones norteamericanas en la región y de la doctrina del progreso contratado, Saez impondrá en el gobierno de Frei la idea de "una segunda expansión industrial". Terminado el crecimiento en base al reemplazo de importaciones la nueva etapa debía basarse en un gran esfuerzo para crear "complejos industriales de gran envergadura", tales como las de la industria petroquímica, la celulosa, la automotriz, la química de base, unidas a una expansión sustancial del cobre y del acero. Todo esto requería grandes recursos, moderna tecnología y amplios mer-

cados. Por lo mismo, sólo resultaba posible en una asociación estrecha con los capitales extranjeros que estuvieran dispuestos a acudir a Chile —obviamente los norteamericanos. Así Saez fue el principal negociador de los Convenios del Cobre de 1964 que implican enormes concesiones a las Compañías Anaconda, Kennecott y la llegada de Cerro Corporation, a cambio del compromiso de un programa de inversión de 720 millones de dólares “para doblar la capacidad productiva de la actividad cuprífera en Chile”. Designado por el presidente Frei vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción inicia la aplicación de sus planes sobre la base de sociedades mixtas entre el Estado chileno y poderosas compañías americanas. Los cuatro complejos petroquímicos se explotan en una sociedad en que Chile tiene el 20% de las acciones mientras el 80% queda en poder de la Dow Chemical. Los dos nuevos proyectos de industria de la celulosa originan una sociedad mixta en que el 51% del capital es del consorcio Parsons and Whittmore en tanto que el 49% de minoría es para el Estado de su país; en la Sociedad Minera Andina, que explota el nuevo yacimiento de cobre de Río Blanco (con capacidad potencial de 65 mil toneladas anuales) el 70% es para la Cerro Corporation y sólo el 30% para Chile, en tanto que en la Cía. Minera Exótica (capacidad potencial de 115 mil toneladas anuales) la proporción es aún más desfavorable: 75% para Anaconda y sólo 25% para el Estado.<sup>6</sup>

Pero el proceso de desnacionalización de la actividad industrial y minera no se redujo sólo a los proyectos mayores. El advenimiento de la

<sup>6</sup> El tercer ideólogo, para los efectos de este análisis, puede ser omitido, aunque tuvo su importancia. Roger Veckmann, sacerdote jesuita, director de DESAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de América Latina) estudió a fondo la estructura de clase chilena y descubrió la posibilidad de antagonizar la clase obrera con los “marginales”, esto es, los pobladores de los sectores suburbanos, casi todos migrantes rurales sin trabajo o comprometidos en actividades de ocupación disfrazada y el campesinado, núcleo que recién se incorporaba a la lucha social tras décadas de desorganización en un medio de características semif feudales como era la antigua hacienda chilena. Estos grupos debían ser agrupados en torno a un organismo gubernamental, la Consejería de Promoción Popular, que debía promover los intereses de estos sectores más pobres como antagónicos a los del proletariado industrial, aprovechando la ventaja numérica de los primeros en un país como Chile donde poco más del 15% de la población activa estaba sindicalizada y pertenecía a la Central Unica de Trabajadores de Chile. Es a la luz de este proyecto que deben mirarse diversas medidas del régimen de Frei relativas al agro como la Ley de Sindicalización Campesina; la nivelación de los salarios mínimos campesinos con los salarios mínimos industriales (Ley 16250 de 1965); la Ley de Reforma Agraria (Ley 16640 de 1967), etc. Obviamente estuvo presente también el deseo de ensanchar el mercado interno para la producción industrial con masas que estaban prácticamente al margen del circuito monetario; en esta línea la norma que tornaba obligatorio el pago en dinero de a lo menos el 75% de

Administración Frei coincidió con la reorganización de la estructura de concentración de las empresas en Estados Unidos y la aparición de los "conglomerados" que ha descrito adecuadamente el economista brasileño Celso Furtado.<sup>7</sup> Esta nueva estructura apoyada en un gran aparato financiero central con inversiones múltiples y diversificadas en todos los campos abrió en toda América Latina nuevas posibilidades de inversión, a la vez que de adquisición de empresas nacionales ya creadas. En Chile, así ocurrió. Sólo en un año —1967— el gobierno de Frei aprobó 22 proyectos de inversión con un total de 907 millones de dólares, de los cuales 751.5 millones provenían del exterior.

Todos estos hechos tuvieron la virtud de provocar una amplia toma de conciencia de los peligros que el destino de Chile corría como nación independiente. Así surgió un sentimiento nacional en torno al control de las riquezas básicas que tuvo oportunidad de expresarse ya antes de las elecciones presidenciales de 1970.

En la nueva etapa abierta por la Democracia Cristiana se había optado por buscar el crecimiento al precio de la independencia nacional, abriendo paso a una dependencia de nuevo cuño, diversificada e integral. A la burguesía chilena se le ofrecía la posibilidad de optar ahora por asociaciones abiertas con los consorcios transnacionales si deseaba participar en los nuevos planes industriales; si no podía entrar en esos proyectos se le continuaba protegiendo su escasa eficiencia por la vía de los precios y de la protección arancelaria, en un mercado ampliado a buena parte de la población rural. El único grupo castigado por este intento modernizante eran los terratenientes cuyas tierras podían ser expropiadas conforme a la Ley de Reforma Agraria, pero aún a éstos se les respetó una reserva equivalente a 80 hectáreas de riego básico de acuerdo a una tabla especial de equivalencias. Así el gobierno de Frei intentó satisfacer a todos los capitalistas del país, aunque es obvio que no lo consiguió.

En abril de 1969 uno de los parlamentarios más influyentes de la Democracia Cristiana, el diputado y senador electo Narciso Irureta, for-

la remuneración del campesino cuando tradicionalmente el porcentaje de "regalías" (prestaciones no monetarias) había sido muy alto. La alianza capas medias-marginales llamada a otorgar a Frei y a la Democracia Cristiana la mayoría política aislando a los trabajadores no funcionó y los planes en este rubro resultaron en un sonado fracaso. La clase obrera y sus organismos fueron capaces de evitar el aislamiento y lograr, por el contrario, radicalizar e incorporar a su proyecto histórico a importantes contingentes de "marginados" como lo demostró la victoria de Allende en 1970 en zonas donde estos grupos son mayoritarios.

<sup>7</sup> Este punto fue resuelto con la creación de mercados de integración subregional. El Pacto Andino ofrecía el mercado de más de 50 millones de personas de que carecía Chile.

muló una serie de denuncias en contra de Anaconda. Esta empresa, que en 1964 se había negado a constituir sociedades mixtas con el gobierno de Frei en sus dos minas mayores Chuquicamata y El Salvador, había contraído, en cambio, el compromiso de explorar en el futuro todo yacimiento con el Estado para lo cual se había acordado la creación de la sociedad Exploradora Cordillera, S. A., la que no se había materializado. Anaconda, actuando a través de una sociedad fantasma en la que tenía 29 200 de las 30 000 acciones que la conformaban, intentaba ahora obtener la constitución de dominio minero sobre 375 000 hectáreas que comprendían casi la totalidad de los solares de Tora y Atacama, ricos en diversas sustancias y en particular litio, productos estratégicos y escasos, de empleo indispensable en los programas de investigación espacial. El denunciante llamaba la atención sobre la burla inadmisibles que este procedimiento importaba y llama a sancionar a la compañía norteamericana con la nacionalización de todas sus instalaciones en el país.

A partir de este planteamiento en todo el país brotó una presión incontenible exigiendo la nacionalización de toda la Gran Minería del Cobre. Por primera vez éste deja de ser una bandera de las fuerzas de izquierda para revestir el carácter más amplio. El propio Consejo de la Democracia Cristiana, modificando su posición contraria a la medida, se dirige al Presidente y le solicita que nacionalice.

El presidente Eduardo Frei, en cambio, opta por dividir a la opinión nacional y abre, durante un mes, negociaciones directas con una comisión de ejecutivos de Anaconda que viajan especialmente a Santiago para esos efectos. Al final —el 26 de junio de 1969— logra un acuerdo que lo único que provoca es decepción. Lo denomina “nacionalización pactada”, pero no se trata de otra cosa que de una compra privada, del 51% de las acciones, una opción de compra diferida y a elevado interés del 49% restante. Las fuerzas de izquierda replican a la determinación presidencial con dos proyectos de ley para nacionalizar en forma completa en condiciones que salvaguardan el interés nacional. Ninguno de ellos es aprobado, pero con ese episodio debe encontrarse al momento con que se expresa claramente como un anhelo nacional, la recuperación del cobre de manos norteamericanas. Tanto era así que en 1970 tal iniciativa es contemplada no sólo en el programa de la Unidad Popular, sino también en el de Radomiro Tomic, abanderado de la DC.

### *3. El carácter nacional y antimperialista del programa de la Unidad Popular y el choque con Estados Unidos*

A diferencia de lo acontecido al constituirse el Frente Popular en 1938,

ahora con la Unidad Popular la tonalidad política estaba determinada por la fuerza alcanzada por el movimiento obrero y sus partidos. Esto repercutió en el Programa de Gobierno que esta vez sí tuvo un contenido anticapitalista y antimperialista definidos.

Por lo mismo en el diagnóstico que introducía dicho Programa<sup>8</sup> se expresaba:

“Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estrechamente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.”

“Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentuó cada vez más en su dependencia su papel de niño menor del capital extranjero.”

Luego, describiendo alcances y consecuencias de la penetración imperialista, en otro párrafo de la parte inicial del documento se sostenía:

La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.) y en la actividad industrial, bancaria y comercial; mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes; de los préstamos norteamericanos en condiciones usuarias que nos imponen gastos en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos norteamericanos los productos comprados etc.

Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy los norteamericanos invertían en América Latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaban 16 mil millones de dólares.

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital invertido en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.

La conclusión consiguiente a tales argumentaciones resultaba natural: un vasto programa de nacionalizaciones como prerrequisito para retornar a una dirección nacional de la economía chilena y junto a ello la creación de una área de Propiedad Social que desempeñara un papel hegemónico e

<sup>8</sup> El texto completo del programa de la UP se puede encontrar en el apéndice de: Varios Autores, *La vía chilena al socialismo*, México, Editorial Siglo XXI, 1973.

imprimera carácter a todo el sistema productivo debía ser la resultante de la aplicación de tales medidas.

El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a construir una área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropián. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

- 1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
- 2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;
- 3) El comercio exterior;
- 4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;
- 5) Los monopolios industriales estratégicos;
- 6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica pesada, la celulosa, el papel.

Chile tenía hasta 1970 en materia de cumplimiento de programas electorales toda una tradición que los desvalorizaba debido a que una vez triunfantes los Jefes de Estado desvirtuaban las medidas definitivas, apartándose con mucha frecuencia de las promesas anteriores. Con la Unidad Popular, en cambio, no ocurrió eso; Salvador Allende en particular mostró en todo momento una notable disposición por ceñir su conducta al programa sin rebasar ni desvirtuar sus medidas; en este sentido su conducta constituye una buena demostración de la importancia que tiene la "voluntad política" en la realización y los límites de un proceso de transformaciones.

A partir de noviembre de 1970, con el envío de un Proyecto de Reforma Constitucional para nacionalizar el cobre, todos y cada uno de los procesos de recuperación de riquezas básicas fueron ejecutados y el Estado chileno asumió el control de ellas; en ocasiones se utilizaron procedimientos oblicuos y a través de lo que en Chile se conoció como "resquicios legales" se otorgó una interpretación progresiva a ciertos textos legales ha-

ciendo que mecanismos de control administrativo, concedidos para una aplicación de corto plazo, tales como las requisiciones e intervenciones de empresas, sirvieran de fundamento para la incorporación de empresas al Área Social de la economía.

En torno al proceso de nacionalizaciones se radicó el conflicto entre el gobierno constitucional de Chile y el de Estados Unidos; este último actuó como agente directo de las grandes corporaciones transnacionales y desató lo que el Presidente Chileno calificó en su discurso de las Naciones Unidas como "un bloqueo invisible". Este último carácter se fue perdiendo a medida que transcurrían los meses hasta terminar en un cuestionamiento abierto del régimen de la Unidad Popular.

El conflicto entre Chile y Estados Unidos, de una duración bastante prolongada —prácticamente tres años—, se desarrolló en todos los escenarios y con un ritmo incesante.

Un breve recuento permite formarse una idea de sus alcances y muestra la elevada capacidad de aprendizaje que los diversos órganos y agencias gubernamentales de Estados Unidos, así como los consorcios transnacionales de propiedad de sus nacionales, reflejan luego de la experiencia cubana.

a) *Obstaculizamiento en el proceso de reorganización de la deuda pública externa de Chile.* Tiene lugar ante el Club de París, a partir de una solicitud del Gobierno de Allende a sus 14 países acreedores de noviembre de 1971. Chile sólo obtiene, luego de 4 períodos de sesiones infructuosas, que se le permita entrar en negociaciones bilaterales con cada país. Arregla entre marzo y octubre de 1972 con todos ellos, menos con Estados Unidos, titular de más de 40% de los créditos entre el gobierno chileno. ¿Razón? La no indemnización "adecuada" a las compañías de cobre nacionalizadas.

b) *Rechazo de las solicitudes chilenas en los organismos internacionales de crédito.* La situación histórica de Chile en relación a la disponibilidad de créditos de las instituciones multilaterales tornaba casi imposible una suspensión brusca de estos recursos; Chile había recibido del Banco Interamericano de Desarrollo 50 préstamos por un total de 310 millones de dólares desde su creación en 1959 hasta 1970; el Banco Mundial, por su parte, había otorgado a Chile 18 préstamos con un total de 234.6 millones de dólares hasta 1970.<sup>9</sup>

Estados Unidos bloqueó todo préstamo a Chile en base a la Enmienda

<sup>9</sup> Ver datos muy completos en Elizabeth Farnsworth, *et al.*, *El bloqueo invisible*, Ediciones Periferia, 1973.

González, disposición legal aprobada a comienzos de 1972 como una evidente respuesta a la situación chilena; ahí se instruía a los representantes de Estados Unidos para rechazar solicitudes de créditos de países que hubieran nacionalizado bienes de propiedad de ciudadanos estadounidenses sin pagar una indemnización completa.

c) *Boicot en las negociaciones políticas directas.* Luego de un cambio de notas diplomáticas en el primer semestre de 1972, el gobierno de Chile aceptó la realización de discusiones políticas directas entre delegaciones oficiales de Estados Unidos y Chile. Éstas tuvieron lugar en Washington en dos “ruedas”, en diciembre de 1972 y marzo de 1973, en la sede del Departamento de Estado. En ambas oportunidades la delegación norteamericana otorgó el carácter de “prerrequisito” a una normalización política al “acuerdo satisfactorio por parte del gobierno de Chile con las firmas cupríferas que operaban en Chile”.

El “impasse” luego de la segunda rueda fue tal que, con la excepción de esporádicos intentos entre el presidente Allende y el secretario de Estado W. Rogers, en Buenos Aires, al realizarse la transmisión del mando al presidente Héctor Cámpora y de una entrevista a fines de junio en Lima entre el canciller chileno Clodomiro Almeyda y el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos Jack Kubish, se entendió por el Gobierno de la Unidad Popular que nuevas exploraciones no tenían sentido.

d) *Acciones de empresas norteamericanas contra el gobierno chileno.* A lo menos tres grandes compañías transnacionales de procedencia norteamericana participan en actividades directamente ofensivas contra el gobierno de Chile.

a') La International Telegraph and Telephone (ITT) propuso en octubre de 1970 un programa al Departamento de Estado y a la Agencia Central de Inteligencia un plan para impedir el ascenso de Salvador Allende al poder “como un medio para salvaguardar nuestros intereses en Chile”. Este plan recibió difusión mundial en abril de 1972 al ser divulgados y reconocidos por la propia empresa norteamericana los memoranda secretos en que se contenían.

b') La Kennecott Copper Co. desplazó una parte importante de su Departamento Legal a Europa con el objeto de iniciar juicios en contra del Estado chileno e imposibilitar el descuento de rentabilidades excesivas dispuesto por el presidente Allende. Kennecott había obtenido tasas de utilidades sobre el capital invertido en 166 por ciento anual en 1967, 113 por ciento en 1968 y 205 por ciento en 1969; se proclamó dueña de la mina ya nacionalizada de El Teniente, amenazó a los usuarios de cobre chileno en

memorándum reservado del 7 de septiembre de 1972 y trabó juicios para embargar la producción de cobre chilena o su valor en Francia, Italia, Suecia, Holanda y República Federal Alemana.

c') La Anaconda Copper Co. embargó bienes chilenos en Nueva York en febrero de 1972 afectando las cuentas de las agencias chilenas de la Compañía de Fomento y la Corporación del Cobre; los funcionarios chilenos pudieron aminorar esta medida con retiros oportunos de los depósitos y cambiando la ruta de sus productos a fin de evitar su paso por Nueva York. La causa del embargo fue el propósito de la forma de forzar una compensación.

Es importante anotar que Anaconda, con sólo un 16.64 de sus inversiones totales en Chile, había conseguido en 1969, allí, el 79.24% de sus utilidades globales al retirar 78.6 millones de dólares.

e) *Actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.* Si nos ceñimos tan sólo a los actos de intervención oficialmente admitidos por ejecutivos de la CIA se puede concluir su inge-  
rencia reconocida en cuatro momentos.

a') Durante la campaña presidencial de 1970 para apoyar la candidatura del conservador Jorge Alessandri en la operación conocida como "Campaña del Terror" (amedrentamiento de la opinión pública acerca de las perspectivas del socialismo).

b') Organización y favorecimiento de los planes masivos de terrorismo en que se trató de impedir la investidura de Salvador Allende entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre del 70. Este programa incluye el apoyo financiero al principal diario del país *El Mercurio*, tenaz opositor de Allende.

c') Mantenimiento financiero de los partidos de oposición, agrupados en la "Confederación Democrática" en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

d') Apoyo a las organizaciones de dueños de camiones y otros grupos interesados en "desestabilizar" al gobierno de Allende (expresión eufónica con que la CIA reemplaza la más violenta y exacta, "derrocar"). Esta línea cobró vigor durante la huelga general de empresarios de octubre de 1972, y en el paro final de gremios y colegios de profesionales, a contar de julio de 1973 hasta la fecha del golpe.

f) *Suspensión de la asistencia técnica y obstáculos a las operaciones comerciales.* Según informaciones oficiales del Banco Central de Chile, al asumir el gobierno de Allende el 78.4% de los créditos comerciales de corto plazo de que disponía Chile era de proveedores y de bancos norteamericanos. Esta situación posibilitó uno de los aspectos más sólidos y efec-

tivos del "bloqueo" a Chile. Ya a comienzos de 1971 el Eximbank rechazó una solicitud de préstamo chileno para conseguir 3 aviones de pasajeros BOEING para la línea aérea Lan-Chile. Desde ese momento el Export-Import Bank constituyó una puerta cerrada; ya en 1972 las negativas se extienden a los bancos privados que se encontraban en un comienzo bien dispuestos frente a Allende. La adquisición de maquinaria, repuestos, partes y piezas se torna crítica aun pagando el valor de los productos de contado, al extremo de que un intento de adquisición de maíz gestionado por la agencia estatal ECA (Empresa de Comercio Agrícola) de Chile es rechazada a mediados de 1972.

La asistencia técnica es cortada, con la sola excepción de los Programas de Ayuda Militar que anualmente representaba el 10% del presupuesto total de defensa nacional. Chile, con 175.8 millones de dólares recibidos por este concepto en las décadas del 50 y el 60, se había constituido en el país más favorecido por Estados Unidos después de Brasil. Los acontecimientos del 11 de septiembre y el giro impreso a su gobierno por la Junta Militar demostró que los Estados en esto no se equivocaban. El dinero invertido en asistencia a los militares chilenos ha resultado una excelente inversión.